

LOS SISTEMAS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19, ESPECIAL REFERENCIA A LA MEDIACIÓN

DISPUTE RESOLUTION SYSTEMS IN THE COVID-19 ERA, SPECIAL REFERENCE TO MEDIATION

GEMA VALLEJO PÉREZ

Universidad de León

Recibido: 26/05/2020

Aceptado: 22/06/2020

Resumen: En este trabajo de investigación analizamos la génesis de los principales métodos de resolución de conflictos utilizados como alternativa a la vía judicial con especial atención al caso de la Mediación. Precisamente la Mediación se ha ido implantando en el mundo como una solución en épocas de importantes cambios sociales. En la actualidad, con la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19, la Mediación se presenta como un sistema para la solución de diferencias muy eficaz ante el colapso del sistema judicial.

Palabras clave: Mediación, Covid-19, Ventajas, Administración de Justicia

Abstract: *In this research work we analyze the genesis of the main methods of conflict resolution used as an alternative to the judicial process with special attention to Mediation. Precisely Mediation has been implanted in the world as a solution in times of important social changes. Currently, with the health, economic and social crisis caused by Covid-19, Mediation is presented as a very effective dispute resolution system in the face of the collapse of the judicial system.*

Keywords: *Mediation, Covid-19, Advantage, Administration of Justice*

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 2. PANORAMA LEGAL Y JUDICIAL ANTE LA CRISIS (SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL) PROVOCADA POR EL COVID-19 EN ESPAÑA. 3. LA IMPLANTACIÓN DE LA MEDIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE IMPORTANTES CAMBIOS SOCIALES. 4. LAS BONDADES (VENTAJAS) DE LA MEDIACIÓN COMO SISTEMA PARA RESOLVER LAS DIFERENCIAS. BIBLIOGRAFÍA.

1. INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La denominada ‘*litigation explosion*’ propia de los EEUU, que podríamos traducir como la creencia de que tan sólo los órganos jurisdiccionales son los legitimados para resolver cualquier conflicto, interpretar y aplicar el derecho que corresponda, produce el colapso del sistema judicial con el consiguiente retraso ya habitual

en los tribunales¹. Esta cultura litigiosa que procede del convencimiento de que tan solo la vía judicial es la adecuada para resolver los conflictos intensifica los procedimientos sin control, y produce desajustes en los mecanismos procesales de todos los ordenamientos jurídicos en general.

En este contexto, es en el que nacen, como contraposición, los ADR, métodos alternativos de resolución de conflictos, con la clara intención de mejorar el acceso a una justicia de calidad, a una tutela judicial efectiva, atribuyendo el protagonismo a los ciudadanos envueltos en un conflicto, que puedan de este modo resolver los problemas de una forma más ágil, con todas las garantías jurídicas necesarias, dejando a los tribunales como última instancia en caso de no llegar a una solución de disputa satisfactoria para los implicados en este proceso.

Precisamente en EEUU², cuna de la intensificación cualitativa de la litigación en los tribunales, surge con fuerza la mediación, incluso antes de adoptar la denominación de ADR como conjunto de métodos alternativos para resolver conflictos, por lo que podemos encontrar allí el origen de la utilización de los ADR, ahora presentes en casi todas las ramas del Derecho actual.

La diferencia entre los sistemas jurídicos de *Common Law* y del *Civil Law*, el primero propio de los EEUU, y el segundo al que pertenece el Ordenamiento Jurídico Español, con una preeminencia de fuentes del Derecho distinta que repercute en

¹ MACHO GÓMEZ, C., “Origen y evolución de la mediación: el nacimiento del «movimiento ADR» en Estados Unidos y su expansión a Europa”, *Aid to Dependent Children*, n.º 67, 3, 2014, p. 935: “También han surgido otras circunstancias que han intensificado dicha litigiosidad cualitativamente. La llegada de las nuevas tecnologías, la globalización y la internacionalización de las relaciones sociales, han generado normativas sofisticadas, y provocado litigios, que, por su propia naturaleza, crean procesos mucho más lentos, costosos, y con circunstancias a considerar, muy diferentes de las analizadas en las habituales disputas internas”.

² MCMANUS, M. y SILVERSTEIN, B., “Brief History of Alternative Dispute Resolution in the United States”, *Cadmus. Promoting Leadership in Thought that Leads to Action*, n.º 1, 3, 2011, pp.100-101, se remontan a la tradición del common law anglosajón como el remoto origen de los ADR, buscando los orígenes en la organización colonial de los futuros EEUU, y en la legislación del siglo XVIII, hasta llegar al antecedente más próximo a los ADR actuales: “*Alternative Dispute Resolution (ADR) in the common law tradition has its origins rooted in English legal development. As early as the Norman Conquest, legal charters and documents indicate that English citizenry instituted actions concerning private wrongs, officiated by highly respected male members of a community, in informal, quasi-adjudicatory settings. In some instances, the king utilized these local forums as an extension of his own legal authority; rather than adjudicate a suit via the more formal king’s court, the king would simply adopt the decision of a local, but highly respected layperson without ever “reaching the merits” of the suit, creating one of the first forms of arbitration. In some sense, then, common law ADR has been around for centuries. In the United States, commercial arbitration existed in the early Dutch and British colonial periods in New York City... Shortly after independence and the creation of a new government, ADR found its place in a number of applications, albeit sporadically. For instance, in the Patent Act of 1790, Congress provided for an arbitration system of competing patent claims... Early in the 20th Century, states began taking a concerted interest in systematic ADR as a litigation alternative. In the 1920s, over a dozen states passed modern arbitration laws and Congress enacted a federal cognate, the Federal Arbitration Act*”.

todos los aspectos jurídicos, podría dar argumentos a quienes consideren que la implementación de los ADR resulta ajena a nuestra organización jurídica. Pero en realidad la resistencia a dar cobijo a los ADR no proviene por lo habitual de sectores que conozcan en profundidad ambos sistemas jurídicos, sino del temor a que los métodos de resolución alternativos sean más efectivos, veloces y económicos que los tradicionales, reduciendo el beneficio económico de los distintos actores que participan en el sector jurídico, o todo lo contrario, que sean ineficaces por no estar totalmente judicializados desde su inicio³.

Bien es cierto que la resistencia primera se ha convertido con el paso de los años en una nueva aceptación en el orden jurídico occidental de los medios alternativos, como la mediación, que buscan pacificar ordenadamente un conflicto entre partes, por lo que la apuesta progresiva y jurídicamente organizada de los ADR es una realidad tangible, que se puede observar cada vez con una mayor presencia en el Ordenamiento Jurídico Español actual.

Las sociedades han ido evolucionando y los conflictos se han ido incrementado y complejizando de manera importante. Además, la globalización ha derribado las fronteras y el objeto de estas controversias es tan fluido como los varios modos en que se pueden ver conculcados los derechos de las personas. Paralelamente, debemos señalar que, frente a la diversidad y a la multiplicidad de los conflictos, nos encontramos con estructuras judiciales decimonónicas, complejas y encorsetadas en una burocracia que resultan inadecuadas para los individuos, que hoy día buscan resolver sus problemas de una manera personal, y que necesitan servicios capaces de adaptarse a las necesidades concretas.

Por eso, era necesario buscar sistemas más participativos, más cercanos a las necesidades de las personas, y más próximos a los mecanismos que llevan adelante el proceso de composición del conflicto, sin ver frustrados sus intereses, siempre en el respeto a la Ley, y, siempre que la solución satisfaga a ambas partes⁴.

Se necesitaban procedimientos extrajudiciales⁵, de resolución de controversias, que tuvieran como denominador común la libertad de disposición de los in-

³ RODRIGUES, C., “La Mediación. ¿Una respuesta al nuevo paradigma del Derecho?”, *Revista Derecho*, n.º 15, 2017, pp. 5 y ss., en donde pone de relieve las dificultades para implantar la mediación, en los ordenamientos jurídicos occidentales, en la que muchos no ven más que inconvenientes.

⁴ ORTUÑO MUÑOZ, P., “Introducción: El impulso a la mediación en la experiencia de los PNPM”, en AA.VV. LAUROBA LACASA, Mª. E. y ORTUÑO MUÑOZ, P. (coords.), *Mediación es justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de Mediación Civil y Mercantil*, Ed. Huygens, Barcelona, 2014, p. 125.

⁵ UNIÓN EUROPEA, COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, “Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del Derecho Civil y Mercantil”, Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas, Unión Europea, 2002, pp. 1-40. Disponible en: [<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-jurisprudencia/Normativa-europea/Libro-Verde-sobre-las-modalidades-alternativas-de-solucion-de-conflictos-en-el-ambito-del-derecho-civil-y-mercantil>]. La publicación se centraba en la conciliación y en la mediación como procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos, englobados dentro

interesados y su participación directa a la hora de solucionar sus problemas⁶. La mediación es un método de resolución de conflictos extrajudicial, como lo son también la conciliación, la negociación y el arbitraje⁷. Todos ellos tienen en común que son vías alternativas a la judicial⁸, aunque existen notables diferencias entre ellos en cuanto a la participación de las partes y de un tercero en el procedimiento, en el grado de obligatoriedad del mismo y en los efectos del documento que cierra, o no, el conflicto.

Como luego veremos, estos sistemas de resolución de controversias alternativos a la jurisdicción, y entre ellos la mediación, se fueron implantando debido a importantes cambios sociales sucedidos y a un cambio de mentalidad en la sociedad, donde los individuos toman conciencia de la importancia de su papel, como partes involucradas, en la participación de las soluciones adoptadas para los problemas.

La pandemia mundial provocada por el Covid-19 ha generado importantes problemas en la Administración de la Justicia. La nueva realidad que nos toca vivir en esta sociedad *post-covid* nos lleva a intentar, más que nunca, utilizar sistemas alternativos a la vía judicial para la resolución de los conflictos. A estos sistemas se refiere un nuevo Anteproyecto de Ley, ahora mismo en redacción, como veremos en el siguiente apartado, denominándolos “medios de solución de diferencias”⁹.

de las políticas sobre la mejora del acceso a la justicia y complementarios de los procedimientos jurisdiccionales, por considerar que los métodos de las ADR se adaptan mejor al carácter de ciertos litigios, pues, permiten a las partes establecer un diálogo, que de otro modo, tal vez, no hubiera sido posible, decidiendo por sí mismas si recurrir a los tribunales o a una ADR. La flexibilidad de las ADR permite a las partes decidir qué organización o qué persona guiará el proceso, determinar el procedimiento mismo a seguir, optar por participar personalmente en él y, en su caso, decidir el resultado del procedimiento.

⁶ GARCÍA VILLALUENGA, L., *Mediación en conflictos familiares. Una construcción desde el Derecho de familia*, Ed. Universidad Complutense de Madrid, 2006, pp. 176-178.

⁷ VALLEJO PÉREZ, G., “Arbitraje y fiscalidad en el Derecho Romano”, *Revista General de Derecho Romano*, n.º 24, 2015, pp. 24 y ss.: “El arbitraje está previsto desde la totalidad de los ordenamientos jurídicos de todas las épocas y lugares como método para ofrecer determinadas soluciones dentro del propio sistema jurídico, pero permitiendo flexibilidad y adecuación a determinados problemas en los que la Administración de Justicia no consigue llegar. En la mayor parte de sistemas jurídicos actuales se regula el arbitraje como elemento de economía procesal para aliviar la masificación de asuntos planteados ante los juzgados y tribunales, y como procedimiento para elaborar decisiones jurídicas adecuadas a casos concretos. Conviene advertir, que el proceso arbitral se articula más sobre juicios de valor que sobre juicios lógicos, y que, por tanto, no puede ser sometido a una estricta verificación normativa, pero ello no menoscaba su dimensión técnico-jurídica, si bien, se manifiesta en ámbitos específicos y limitados del Derecho.

⁸ BARONA VILAR, S., *Solución extrajudicial de conflictos. ADR y Derecho Procesal*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, *passim*.

⁹ MINISTERIO DE JUSTICIA. “Consulta pública sobre el anteproyecto de ley de medidas procesales, tecnológicas y de implantación de medios de solución de diferencias”, página web. Disponible en: [https://ficheros.mjusticia.gob.es/Consulta_publica_APL_MEDIDAS_PROCESALES_solucion_diferencias.pdf].

2. PANORAMA LEGAL Y JUDICIAL ANTE LA CRISIS (SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL) PROVOCADA POR EL COVID-19 EN ESPAÑA

Todo cambió con la aparición del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y su declaración como una pandemia, el día 11 de marzo de 2020, por la Organización Mundial de la Salud.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, fue la medida adoptada por el Gobierno para atajar esta grave situación, la cual llevaba aparejada un confinamiento de la población y de paralización casi total de la actividad en todo aquello que no fueran servicios esenciales.

Esta grave situación derivó en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, donde se establecían una serie de medidas para hacer frente a esta crisis sanitaria, económica y social.

La Disposición Adicional Segunda del RD 436/2020 estableció la suspensión de los plazos procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, y la Disposición Adicional Tercera, del mismo Real Decreto determinó la suspensión de los plazos administrativos.

Como consecuencia de la implantación del Estado de Alarma, y sus sucesivas prórrogas, el funcionamiento de los Juzgados se ralentizó hasta su total paralización en el mes de abril, para volver a ponerse en marcha muy lentamente, hasta que se alcanzó la “nueva normalidad” allá por el mes de mayo. Sin entrar en exámenes exhaustivos, podemos asegurar que el número de conflictos en nuestro país aumentó. Podemos apuntar, a manera de ejemplo, y mirando a una realidad próxima, que en al año 2009, epicentro de la reciente crisis económica, el número de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones de nuestro país era de 9.355.526, frente a los 7.725.120 del año 2005. En el año 2015 había bajado hasta los 8.376.311¹⁰.

La crisis sanitaria tendría (y tendrá) importantes repercusiones económicas y sociales que derivaron en numerosos problemas y conflictos, tales como; despidos laborales, expedientes temporales de regulación de empleo, situaciones económicas en las empresas que acabaron con concursos de acreedores, problemas a la hora de realizar las custodias compartidas, quejas de asociaciones de consumidores y usuarios, incumplimientos de pagos de alquileres de viviendas y locales de negocio, violencia de género (mujeres que vieron agravada su situación por el confinamiento), problemas de libertad de circulación durante el confinamiento, incumplimiento de contratos comerciales por imposibilidades diversas y muchísimos más. Además, debemos añadir el correspondiente retraso en todos los asuntos producido por la paralización.

¹⁰ FIDE, “Resolución de conflictos en Tiempos del Covid-19: La Mediación”, página web. Disponible en: [https://www.fidefundacion.es/Resolucion-de-Conflictos-en-Tiempos-del-Covid-19-la-Mediacion_a1318.html].

Si ya nuestros Juzgados estaban saturados, la previsión no es nada halagüeña, se prevé un incremento muy importante de asuntos, seguramente superior al alcanzado como consecuencia de la crisis económica mundial que tuvo su punto más álgido en nuestro país durante los años 2008 y 2009.

Tampoco debemos olvidar el enorme coste económico de la Justicia. Sumando los presupuestos de Ministerio de Justicia, de las Comunidades Autónomas y del Consejo General del Poder Judicial, a 31 de diciembre de 2018, se llega a los 4.057.015.422 euros, y la cifra alcanzada en consignaciones es de 4.552.951.714 euros¹¹. Este coste se verá incrementado, indudablemente, con el aumento de la litigiosidad.

En cualquier caso, no será nunca responsabilidad de los ciudadanos la saturación de la Administración de Justicia al igual que la ciudadanía no ha sido tampoco responsable del colapso hospitalario producido por el coronavirus durante los momentos más duros de la pandemia. Del mismo modo que se operó en la sanidad (y se sigue actuando) tomando medidas excepcionales, incluso ocupando hoteles y construyendo hospitales de campaña, se deberán tomar medidas extraordinarias ante el problema judicial que se avecina.

Algunos autores¹² hablan ya de una sociedad *post-covid* donde algunos valores sociales han cambiado y donde se ha recuperado la sociabilidad propia de la naturaleza humana, la confianza en los otros, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la búsqueda de la comunicación y la búsqueda de la paz y el alejamiento del conflicto.

El Ministerio de Justicia, a través de la secretaría General para la Innovación y Calidad del servicio Público de Justicia abrió un período de consultas (del 8 al 26 de junio de 2020) sobre el Anteproyecto de Ley de medidas procesales, tecnológicas y de implantación de medios de solución de diferencias¹³.

¹¹ Ídem.

¹² N. Belloso Martín ha trabajado el impacto de la pandemia en el Derecho, en la sociedad y en las formas de gestionar los conflictos. *Vid.* BELLOSO MARTÍN, N., “¿Hacia un Estado pandémico? Algunas valoraciones a partir del efecto Covid-19”, en PILAU SOBRINHO, L.L., CALGARO, C. y SEVERO ROCHA, L., (dirs.), *COVID-19 e seus paradoxos*, vol. I, Universidade de Caxias do Sul-Universidade de Passo Fundo-Universidade do Vale do Itajaí-Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil, 2020, pp.383-411; también, BELLOSO MARTÍN, N., “La sociedad del post-Covid19: oportunidad para impulsar y consolidar la mediación”, en PILIA, C. y CERDEIRA, G., (dirs.), PIZARRO MORENO, E. (coord.), *Mediación, conciliación y arbitraje tras la pandemia*, vol. II, Olenijk, 2020, (en prensa); BELLOSO MARTÍN, N., “La multidimensionalidad de una pandemia. Sociedad y Derecho en la era del post-coronavirus”, *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho*, n° 43 (diciembre 2020) (inédito); y por último, de la misma autora, “La sociedad del post-covid19: oportunidad para impulsar y consolidar la mediación”, 2020 (inédito), texto presentado en el *IV Simposio Mediación y Tribunales, Pulso al impulso de la mediación en el nuevo escenario postpandemia*, organizado por el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación en España (GEMME España) celebrado entre los días 21 al 25 de septiembre de 2020 y que se publicará en las Actas del Simposio. Agradecemos a la Dra. Belloso que nos haya facilitado sus textos, aún inéditos, y que nos han resultado de gran utilidad para el presente trabajo.

¹³ MINISTERIO DE JUSTICIA. “Consulta pública sobre el anteproyecto de ley de medidas procesales, tecnológicas y de implantación de medios de solución de diferencias”, página web.

Se presentaba un documento donde se explicaban, en primer lugar, los problemas que se pretendían solucionar con la iniciativa, y así recogía textualmente: “afrontar el problema de la ralentización de los procedimientos desde varias perspectivas. Por un lado, tiene como parámetro principal la agilización de los procesos judiciales, la mejora de su eficacia y la implantación de medidas que permitan al actual sistema de la Administración de Justicia atender en tiempo razonable y útil la tutela judicial que demandan los ciudadanos. Por otro lado, pretende potenciar la capacidad negociadora de las partes, introduciendo medidas eficaces que no acaben derivando en meros requisitos burocráticos, mediante el impulso de la mediación en todas sus formas, el fortalecimiento del arbitraje con un nuevo modelo y la introducción de otros mecanismos de acreditada experiencia en el derecho comparado”.

En segundo lugar, el documento trataba la necesidad y oportunidad de su aprobación, donde se explicaba que, “ante la situación descrita en el anterior apartado se hace necesario adaptar las estructuras de la Administración de Justicia, para poder superar el enorme reto de ofrecer un servicio público eficiente y justo a los ciudadanos”. Además, recogía que “para afrontar, en su conjunto, el volumen de pleitos de los que estaban conociendo juzgados y tribunales y que, previsiblemente, se va a incrementar como consecuencia de la situación generada por el coronavirus, en el anteproyecto de ley se pretenden desarrollar mecanismos de solución de diferencias. En este sentido, el servicio público de Justicia debe ser capaz de ofrecer a la ciudadanía la vía más adecuada para gestionar sus problemas. En unos casos será la vía exclusivamente judicial, pero en muchos otros puede ser la vía consensual la que ofrezca la mejor opción. La elección del medio más adecuado de solución de diferencias aportará calidad a la Justicia y satisfacción al ciudadano. En este contexto cobran importancia las razones de las partes para construir soluciones dialogadas en espacios compartidos”.

También señalar que el tercer apartado del documento subrayaba los Objetivos de la norma y debemos destacar textualmente decía que: El primer gran objetivo de la norma es el desarrollo de sistemas de solución de diferencias. “Se hace necesario avanzar en esta vertiente, dado que se ha observado que los objetivos fijados en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles no ha logrado alcanzar toda la potencialidad augurada desde su gestación, sin duda alguna por cierto anquilosamiento en los mecanismos de solución de conflictos”.

Por último, en cuarto lugar, el documento manifestaba que, “los objetivos expuestos exigen una modificación de gran parte del ordenamiento jurídico procesal, por lo que no hay una alternativa no regulatoria en la consecución de los mismos”.

A continuación, en relación con los métodos alternativos a la resolución de conflictos, y entre otras, se planteaban una serie de cuestiones tales como:

“¿Considera necesario que se acometan reformas integrales en el ámbito de la Justicia en tres grandes planos, distintos pero complementarios, dirigidas

a: (i) encauzar la creciente litigiosidad mediante la implantación de una vía consensual, alternativa a la judicial, que posibilite una mayor participación de la ciudadanía en el sistema de Justicia; (ii) agilizar los procedimientos judiciales ya en curso; y (iii), finalmente, implementar nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la Administración de Justicia?

¿Considera conveniente que se fomente e intensifique una conciencia que haga que los ciudadanos sean conscientes de las posibilidades que tienen para tratar de alcanzar, con la ayuda de los mecanismos, garantías y profesionales adecuados, una solución consensuada y negociada a sus propios problemas?

¿Está Vd. de acuerdo en que se regule un sistema que fomente un intento de negociación previa entre las partes antes de la interposición de la demanda en el orden civil?

¿Está de acuerdo en que para impulsar y fomentar que las partes en una controversia acudan a estos mecanismos de resolución extrajudicial se arbitren los necesarios incentivos y se busque un tratamiento adecuado para la negativa injustificada a tratar de encontrar soluciones negociales previas al proceso?”.

El texto recoge con varias denominaciones tales como: *vía consensual alternativa a la judicial, sistemas de solución de diferencias, intento de negociación, mecanismos de resolución extrajudicial, soluciones negociales*, e incluso refiriéndose concretamente a la mediación, los sistemas alternativos para la resolución de los conflictos.

Por lo tanto, quizá, el nuevo texto legislativo complete de alguna manera el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, donde deberían haberse contenido estas medidas procesales, tecnológicas y de implantación de medios de solución de diferencias.

Debemos señalar también que el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación, aprobado el 11 de enero de 2019, no ha pasado de ser un anteproyecto a pesar de haberse creado el Foro para la mediación del Ministerio de Justicia y de haberse formado cuatro Grupos de Trabajo “para avanzar de forma especializada en dar forma y concretar el citado Anteproyecto”.

Como una de las últimas reformas legislativas, en nuestro país, aprobadas ya en una época *post-covid* y relacionadas con la mediación, concretamente en el ámbito familiar, debemos referirnos a la Ley 9/2020, de 31 de julio, de modificación del Libro Segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado. La norma introduce modificaciones en la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado. De acuerdo con los cambios introducidos en el Código civil, se establece que la sesión previa sobre mediación tiene carácter obligatorio en los supuestos legalmente fijados y que la falta de asistencia no justificada no está sometida a confidencialidad y debe ser comunicada a la autoridad judicial¹⁴. En cuanto a

¹⁴ La necesidad de llevar a cabo reformas legales para introducir la obligatoriedad de la mediación en algunos tipos de conflictos, como los familiares, viene siendo objeto de reivindicación.

las funciones de los colegios profesionales, refuerza el cumplimiento de la función deontológica y disciplinaria respecto a los colegiados que ejercen la mediación, añadiendo la función de velar por que el conjunto de colegiados cumpla las obligaciones de información a los clientes y de fomento y sujeción a la mediación que le imponen las leyes o los códigos deontológicos respectivos. En los mismos términos, se remarca la obligación de los profesionales colegiados de informar a sus clientes sobre la mediación y otras fórmulas de resolución de conflictos y procurar resolver los conflictos que puedan tener en el ejercicio de la profesión con sus clientes o compañeros o con otras personas a través de la mediación u otras formas extrajudiciales de resolución de conflictos. Asimismo, el objeto del Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña se extiende no solo a promover y administrar la mediación, sino también a la promoción y administración de otros métodos alternativos de resolución de conflictos.

La asociación GEMME (Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación), dentro de su guía de buenas prácticas y de promoción de la Mediación ha realizado unos “Aportes sobre actuaciones en Jurisdicción Social”¹⁵. En este ámbito se señala que ya está plasmado legalmente, como uno de los Principios Informadores, la evitación del proceso y el fomento de soluciones fruto del acuerdo entre las partes, mediante la obligatoria conciliación previa a la vía judicial. Proponen, para que esta medida no sea un mero requisito para continuar con el proceso, que se optimice el funcionamiento de los servicios administrativos y la disociación espacio/temporal, de manera que esta fase inicial esté plenamente conectada con el juzgado.

De la misma manera el Consejo General de la Abogacía Española ha realizado una serie de Propuestas para el denominado PLAN DE ACTUACIÓN a que se refiere la Disposición Adicional Decimonovena del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19¹⁶. En el ámbito de la Jurisdicción

ción como una forma de difundir la mediación. *Cfr.* BELLOSO MARTÍN, N., “La sociedad del post-Covid19: oportunidad para impulsar y consolidar la mediación”, cit.

¹⁵ GEMME, “GEMME recomienda fomentar la mediación ante el aumento de litigiosidad que deja el coronavirus”, página web. Disponible en: [<https://mediacionesjusticia.com/mediacion-vs-litigiosidad>].

¹⁶ ABOGACÍA ESPAÑOLA. CONSEJO GENERAL, “Propuestas para el denominado PLAN DE ACTUACIÓN a que se refiere la Disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19”. Disponible en: [https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2020/04/PROPUESTAS-CGAE-DISPOSICIÓN-ADICIONAL-19-RD_LEY-11_2020-21-de-abril-de-2020.pdf]. “- Conciliación y mediación previas a la vía judicial. Se han de realizar modificaciones legislativas en dos ámbitos de materias: 1.1 Potenciar la conciliación en vía administrativa, extendiendo temporalmente el carácter preceptivo de la misma a ciertos procedimientos, como la movilidad geográfica, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo individuales y el derecho a la conciliación personal, familiar y laboral. Deberá fomentarse, con previsión normativa, la actividad mediadora de los órganos conciliadores administrativos, dotándolos de mayor número de personal formado en la materia, así como de mayores medios materiales y dotacionales. 2.2 Igualmente, se fomentará la actividad de los or-

Social, en su punto IV Medidas del Orden Social se refieren también a diversos aspectos de la conciliación y mediación previas a la vía judicial tales como la potenciación de la conciliación en la vía administrativa y fomentando la actividad de los Organismos de resolución extrajudicial de conflictos laborales.

Como resumen podemos decir que, asociaciones de mediadores, profesionales de la mediación, operadores jurídicos, jueces y magistrados, responsables políticos y parte de la ciudadanía se refieren a los métodos para la resolución de los conflictos, alternativos a la vía judicial, como una posible respuesta real a la problemática judicial provocada por la pandemia del Covid-19.

3. LA IMPLANTACIÓN DE LA MEDIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE IMPORTANTES CAMBIOS SOCIALES

Según BRAVO BOSCH¹⁷, “Las dificultades para poder definir la mediación se encuentran sobre todo en la naturaleza interdisciplinar de esta materia, lo que provoca que dependiendo de la profesión del que formula el concepto de mediación, se defina de uno u otro modo. Quién pertenezca al ámbito jurídico incidirá en dicho aspecto, y quién acuda al concepto desde la perspectiva de un psicólogo, lo verá de forma doctrinal muy distinta”. Entonces, si nos fijamos en la mediación desde un punto de vista jurídico, como instrumento para la solución de conflictos, no resulta ser una técnica nueva¹⁸. Como también señala BRAVO BOSCH, la etimología de la palabra mediación proviene del adjetivo latino *medius-a-um*¹⁹, que ya en la Roma Imperial tenía la acepción de “mediador, medianero, negociador”, entendiéndose por tal, aquel que se ofrece para establecer la paz entre aquellos que sostienen una contienda²⁰.

ganismos de resolución extrajudicial de conflictos laborales, mediante los diferentes mecanismos previstos y con la colaboración de los servicios existentes en los diferentes Colegios Profesionales correspondientes. A estos efectos se deberá proceder a la modificación del artículo 63 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) con el objeto de dar carácter vinculante y obligatorio a los acuerdos que se puedan adoptar en dichos actos de conciliación y mediación, ante cualquiera de los organismos legalmente previstos en el artículo 63 de la LRJS respecto de las actuaciones a ejecutar por la Agencia Tributaria, FOGASA y SEPE. Además, en estos casos, con la interposición de la conciliación o mediación se debe ampliar el plazo de suspensión de caducidad y de interrupción de la prescripción, duplicándolos (de 15 a 30 y de 30 a 60, respectivamente). Es preciso dar un mayor margen de tiempo para que los órganos administrativos puedan tramitar los expedientes y, de esa manera, esas medidas alternativas puedan hacer su trabajo”.

¹⁷ BRAVO BOSCH, M. J., “Sobre el nuevo Real Decreto-Ley 5/2012 y la mediación familiar”, *Revista General de Derecho Romano*, n.º 18, 2012, p. 2.

¹⁸ BONORINO RAMÍREZ, P. R., “Justicia y justo comunitario”, IGLESIAS CANLE, I. C., (dir.), *Mediación, Justicia y Unión Europea*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, p. 38.

¹⁹ BRAVO BOSCH, M. J., “Sobre el nuevo Real Decreto-Ley 5/2012 y la mediación familiar”, cit., p. 2.

²⁰ AA.VV., *Diccionario Latino-Español*, Ed. Luis Vives, Zaragoza, 1965. *Medius-a-um*. Adjetivo: mediador, medianero. *Paci médium offert*. Adjetivo: negociador. En el mismo sentido se debe reseñar VIRGILIO, “La Eneida”, Liber VII, vrs. 535: se ofrece para negociar la paz. Sin embargo, en VIRGILIO, *Aeneidos/Eneida*, Edición Bilingüe, Alianza Editorial, Madrid, 1990, p. 105, el Traductor Rafael Fontán Barreiro opta por traducir este verso 535 del Libro VII de la siguiente

Pero habrá que esperar varios siglos, hasta principios del siglo XX y concretamente en los Estados Unidos de América, donde tras el crack de 1929 se utilice la mediación como método extrajudicial de resolución de conflictos, principalmente en el mundo laboral. Y será desde este entorno desde el cual se extenderá a otros ámbitos jurídicos, siendo en las décadas de los años sesenta y setenta del mismo siglo XX cuando empiece a teorizarse e implantarse como una vía alternativa judicial al entender que el reconocimiento y la protección de los derechos de la persona puedan ser efectivos, aunque su tutela no se obtenga a través de un proceso, sino de otro tipo de procedimientos para la resolución de conflictos²¹.

Debemos decir que los años setenta y los años ochenta fueron épocas de mucha excitación y crispación en los EE.UU., donde se produjeron hechos históricos que propiciaron importantes cambios en la sociedad norteamericana, y así podemos señalar, entre otros, protestas en las Universidades, tensiones interraciales, la guerra de Vietnam (y su repulsa por parte de amplios sectores), la lucha por los derechos de la mujer y su igualdad y el aumento del número de divorcios. Estas circunstancias provocaron un importante incremento de la conflictividad, y como consecuencia, la imposibilidad, por parte de las autoridades, de ofrecer soluciones adecuadas a dichos conflictos, sin olvidar que algunos de estos colectivos no tenían un acceso fácil al sistema judicial, por suponer un alto coste económico, o no tenían confianza alguna en él. Todo ello propició la búsqueda de soluciones fuera de los tribunales.

Así, los métodos ADR [*Alternative Dispute Resolutions*]²², y de una manera más destacada la mediación, se reconocen como procedimientos válidos a la hora de

manera: *dum paci medium se offert, iustissimus unus*, “mientras acude mediador de paz, el más justo que fue”.

²¹ BLANCO CARRASCO, M., *Mediación y Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos*, Ed. Reus, Zaragoza, 2009, p. 10.

²² VÁZQUEZ LÓPEZ, A., *La mediación en USA*, Flash Press (blog), Abril de 2013. Disponible en: <<http://alenmediagroup.blogspot.com.es/2013/04/la-mediacion-en-usa.html>>. “*Alternative Dispute Resolution* (ADR) es el término genérico con el que en Estados Unidos se hace referencia a la resolución informal de disputas entre dos partes en conflicto mediante la intervención de una tercera que les ayuda a solucionar la citada disputa sin recurrir a los procedimientos previstos por vía procesal. Los ADR recibieron un impulso significativo de los movimientos a favor de los derechos civiles desde los años sesenta, que han llevado a que en décadas recientes la conciliación, la mediación y el arbitraje se hayan convertido en medios muy populares entre los estadounidenses para la resolución de las disputas jurídicas, contribuyendo también a descongestionar la actividad de los tribunales de justicia norteamericanos, y a las que las universidades estadounidenses dedican competitivos programas de formación especializada. Desde la inicial (1838) negociación de conflictos laborales, en el que el gobierno estadounidense actúa de mediador, hasta (1947) la creación de la agencia federal *Mediation & Concilitation Service* (FMCS), se suceden diferentes actuaciones en el ámbito laboral al amparo de distintas normas sectoriales que regulaban el arbitraje. Su tradicional ámbito laboral de resolución alternativa de conflictos, se expande tras la promulgación de la *Alternative Dispute Resolution Act* (ADRA 1975) y posteriormente con la ley federal *Administrative Dispute Resolution Act* (ADRA 1996), para la resolución de conflictos administrativos que se producen en las diversas agencias gubernamentales y departamentos federales, y la *Alternative Dispute Resolution Act* (ADRA 1998), que regula el procedimiento para resolver conflictos por vías alternativas a la procesal y autoriza la resolución alternativa de disputas en los tribunales

solucionar algunos conflictos con una procedencia interpersonal, lo que explica su éxito a la hora de solucionar controversias y problemas vecinales, raciales o sociales²³.

Prontamente se utilizan para resolver aquellos conflictos originados por las situaciones de separación y divorcio y para paliar las consecuencias legales que se derivan de ellos, como pueden ser la obligación del pago de pensiones de alimentos o la guarda y custodia de los menores. De esta manera, en el ámbito familiar, los operadores jurídicos (jueces y abogados) encontraron en la mediación una herramienta que permitía solucionar controversias de una manera rápida y con un coste mucho más asequible para los implicados. Asimismo, en el caso de la mediación, observaron que las partes se encontraban más satisfechas con la solución conseguida debido a que se había obtenido mediante consenso. Por extensión, se constató que el resto de los ADR también eran muy válidos a la hora de resolver los conflictos ya que mediante el acuerdo entre las partes llegaban a una solución satisfactoria para estas.

El uso de estos métodos alternativos para la resolución de los conflictos y la celebración de la *Conferencia Pound*,²⁴ del 7 al 9 de abril de 1976 fueron las principales razones por las que se implantarían en el sistema legal norteamericano algunas iniciativas que sirvieron para instaurar los citados sistemas alternativos de resolu-

federales. Homogeneizar y simplificar la legislación de los Estados de la Unión en el campo de la mediación es el reto abordado por la *Uniform Mediation Act* del año 2001”.

²³ BARONA VILAR, S., “Fomento de las ADRS en España (Hacia un sistema de tutela plural del ciudadano que permita la desconflictivización y la búsqueda de la paz social)”, cit., p. 182: En general puede afirmarse que la mediación, y muy en especial la mediación familiar, ha surgido como un fenómeno de solución del conflicto que permite romper con la creencia de que ganar el proceso significa resolver el conflicto”.

²⁴ PÉREZ VAQUERO, C., “La importancia de la Conferencia Pound en Análisis y curiosidades jurídicas/iustopía”, (blog), agosto de 2014. Disponible en: [archivodeinalbis.blogspot.com.es/2014/08/la-importancia-de-la-conferencia-pound.html]. Con este nombre se conoce a la *National Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice* celebrada celebró en el campus de St. Paul (Minnesota, EE.UU.) del 7 al 9 de abril de 1976. El nombre por el que se conoce fue un homenaje al decano de la Facultad de Derecho de Harvard, Nathan Roscoe Pound (1870-1964) que, setenta años antes y en el mismo escenario, ya había advertido a los operadores jurídicos [jueces, abogados, fiscales...] de la necesidad de reformar la Justicia para ganar en eficiencia de modo que, en el futuro, las decisiones judiciales sean respetadas por todos: “Sus palabras durmieron el sueño de los justos hasta que el magistrado Warren Burger –presidente de la Corte Suprema– retomó su iniciativa y logró reunir a doscientos juristas para debatir dos grandes cuestiones: en primer lugar, qué clase de controversias se podrían resolver mejor si se acudiera a un sistema alternativo de resolución de conflictos en lugar de recurrir a los órganos judiciales; y, en segundo lugar, de qué manera se podrían lograr procesos más rápidos y menos gravosos para todas las partes. Todo ello con el objetivo de que la Administración de Justicia no llegara a verse desbordada por un notable aumento de la litigiosidad que menoscabara su eficacia”. El profesor Frank Sander señaló en la citada conferencia que debían desarrollarse los criterios para que se pudiera asignar a cada clase de conflicto el proceso que resultara más adecuado para resolverlo. “Un concepto al que se refería como *Multi-door Courthouse*; cuando un ciudadano acudiera a un tribunal para solucionar una disputa, metafóricamente, tendría que acceder a la tutela judicial efectiva por una puerta u otra –negociación, mediación, conciliación, arbitraje, juicio... por citar distintos ejemplos combinables entre sí– en función de las circunstancias de cada caso”.

ción de conflictos. Pero su institucionalización llegaría con la publicación de leyes que promoverían su aplicación, y también con el establecimiento de Programas ADR en los Tribunales Federales de Distrito, sobre todo en asuntos civiles.

En la década siguiente (en los años noventa) se afianza la utilización de estos ADR, y entre ellos especialmente la mediación. Ya en el año 2001 se elabora el *Uniform Mediation Act (UMA)*²⁵ para clarificar y unificar toda la legislación sobre mediación existente hasta la fecha en los Estados Unidos de América. En el documento citado se define el concepto de mediador y se regula su imparcialidad²⁶; se da un amplio concepto de mediación²⁷ que abarca todos los tipos existentes, y se excluyen de su ámbito: a) la mediación fruto de la negociación colectiva; b) la mediación efectuada por un juez; c) la llamada *peer mediation* llevada a cabo en centros educativos, y d) la mediación realizada en centros correccionales para jóvenes²⁸. Se regula la *mediation privilege*, y la garantía de confidencialidad, recogiendo el derecho de las partes y del mediador a negarse a declarar en un proceso judicial y a proporcionar cualquier información o suceso acaecido durante las sesiones de mediación en las

²⁵ UNITED STATES OF AMERICA, “Uniform Mediation Act (Last Revised or Amended in 2003), The National Conference of Commissioners on Uniform State Law”, 2003. Disponible en: [http://www.uniformlaws.org/shared/docs/mediation/uma_final_03.pdf].

²⁶ UNITED STATES OF AMERICA, “Uniform Mediation Act (Last Revised or Amended in 2003), cit., Section 2(3)”. Disponible en: [http://www.uniformlaws.org/shared/docs/mediation/uma_final_03.pdf].

“Mediator”. Several points are worth stressing with regard to the definition of mediator. First, this definition should be read in conjunction with Section 9 (c), which makes clear that the Act does not require that a mediator have a special qualification by background or profession. Second, this definition should be read in conjunction with the model language in Section 9(a) through (e) on disclosures of conflicts of interest. Finally, the use of the word “conducts” is intended to be value neutral, and should not be read to express a preference for the manner by which mediations are conducted.

²⁷ UNITED STATES OF AMERICA. “Uniform Mediation Act (Last Revised or Amended in 2003)”, cit., Section 2. Disponible en: [http://www.uniformlaws.org/shared/docs/mediation/uma_final_03.pdf].

Definitions. In this [Act]: (1) “Mediation means a process in which a mediator facilitates communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute”. Mas adelante, en Comment 1. Section 2(1). Mediation”, se aclara: “The emphasis on negotiation in this definition is intended to exclude adjudicative processes, such as arbitration and fact-finding, as well as counseling. It was not intended to distinguish among styles or approaches to mediation. An earlier draft used the word –conducted–, but the Drafting Committee preferred the word “assistance” to emphasize that, in contrast to an arbitration, a mediator has no authority to issue a decision. The use of the word –facilitation– is not intended to express a preference with regard to approaches of mediation. The Drafters recognize approaches to mediation will vary widely”.

²⁸ UNITED STATES OF AMERICA. “Uniform Mediation Act (Last Revised or Amended in 2003), cit., Section 3(b)(1) and (2)”. Disponible en: [http://www.uniformlaws.org/shared/docs/mediation/uma_final_03.pdf].

Exclusion of collective bargaining disputes. 4. Section 3(b)(3). Exclusion of certain judicial conferences. 5. Section 3(b)(4)(A). Exclusion of peer mediation. 6. Section 3(b)(4)(B). Exclusion of correctional institutions for youth.

que hubieran participado. Además, se establece el derecho a impedir que cualquier otra persona declare sobre lo que se dijo durante dichas sesiones de manera que nada de lo dicho o sucedido en ellas se podrá hacer público²⁹.

Los ADR, rápidamente, por su proximidad, se “exportan” a Canadá y desde este país se trasladan a Europa a través, evidentemente, del Reino Unido. Su implantación en estos países fue rápida y sencilla, debido a que todos ellos tienen sistemas procesales de *common law*³⁰ que son más flexibles y prácticos a la hora de establecer acuerdos, porque cuentan con pocas previsiones legales sobre las relaciones contractuales y conceden una amplia libertad, de manera que se permite alcanzar un acuerdo sobre todo lo que no está expresamente prohibido por la Ley; frente a los sistemas procesales de *Civil Law*³¹ que son más rígidos y formalistas, y las relaciones contractuales están muy reglamentadas por la ley.

Por lo tanto, la mediación en Europa va a iniciar su andadura en el Reino Unido, tanto en el ámbito mercantil como en el familiar, lugar, donde, como se dijo anterior-

²⁹ IZAGUIRRE ARTAZA, J., “El Arbitraje y la Mediación en Estados Unidos, Ed. ICEX España Exportación e Inversiones, 2014. Disponible en: [file:///C:/Users/Gemma/Downloads/4768017.pdf]. La confidencialidad es el objeto esencial de la UMA, ya que la plena sinceridad de las partes y del mediador será la vía que posibilite que la mediación llegue a buen puerto. “El núcleo central de la UMA radica en el hecho de que la comunicación en la mediación es y está sujeta a confidencialidad y no puede ser objeto ni de investigación ni de utilización como prueba o evidencia en cualquier otro procedimiento que no sea el mediador”.

³⁰ CANCIO FERNÁNDEZ, R. C., *La cita legal en el ordenamiento jurídico español. Derecho comparado y perspectivas de futuro*, Ed. Club Universitario, Madrid, 2006, p. 31. En la actualidad, utilizan el Sistema Jurídico de *Common Law*: Inglaterra, Gales, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Canadá (salvo en la provincia de Quebec que sigue el sistema de Derecho continental en el Derecho civil y el Derecho anglosajón en el Derecho Penal), EE.UU. (a excepción de Luisiana, donde, a consecuencia de su herencia francesa, usa un sistema de Derecho continental), Hong Kong, India, Malasia, Singapur y Sudáfrica; lo que se conoce como Commonwealth (asociación que surge después de la colonización bajo la influencia de Inglaterra).

³¹ CUADRADO GAMARRA, N., “Diferencias entre los sistemas Romano-Germánico (Civil Law) de Common Law y su repercusión en la inteligencia artificial”, *KÍNESIS: Revista Electrónica de Metodología e Historia del Derecho - Revista del Instituto de Metodología y Ciencia Jurídica*, n.º 2, 2005. Disponible en: [www.ucm.es/info/kinesis]. “El término *Common Law* se emplea en diferentes sentidos. Así, suele emplearse para designar: a) El Derecho angloamericano en su totalidad, distinto del sistema jurídico romano. b) El elemento casuístico del Derecho angloamericano constituido por los precedentes judiciales, es decir, la jurisprudencia de los tribunales angloamericanos, a distinción de las leyes promulgadas formalmente por el legislador. c) El Derecho formado por las decisiones y precedentes judiciales aplicados por los clásicos tribunales ingleses llamados *Common law courts* y los modernos tribunales de igual categoría tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en contraposición con el Derecho constituido por la jurisprudencia de los tribunales de *equity* (Derecho-equidad, almirantazgo, Derecho marítimo, Derecho canónico, etc.). d) El antiguo Derecho en Inglaterra y en los Estados Unidos, a distinción de los preceptos introducidos en épocas recientes por la legislación o la jurisprudencia. En adelante escribiremos *Common Law* cuando nos refiramos al sentido a) y *Common law* para designar el sentido b) La familia del *Common Law* comprende –el Derecho de Inglaterra y todos aquellos sistemas que han tomado como modelo el Derecho Inglés y se han configurado inspirándose en éste, cuya estructura jurídica es fundamentalmente jurisprudencial–”.

mente, los procesos extrajudiciales de solución de conflictos no están regulados por Ley³².

Y será en este ámbito familiar, en los casos de separaciones y divorcios, donde aparecerá la mediación, que se revelará como una herramienta más útil y más adecuada que la tradicional vía judicial para resolver este tipo de controversias. Poco a poco los profesionales que se encargaban de esta labor mediadora se organizaron en asociaciones y en 1990 se elaboró el informe *Family Law: The Ground for Divorce*, a través del cual Gobierno resaltaba las ventajas que suponía la resolución amistosa de las disputas surgidas como consecuencia de una ruptura matrimonial. Se institucionaliza la mediación en el Reino Unido con la promulgación de la *Family Law Act*, que tiene como uno de sus objetivos el de llegar a una solución amigable, y así la citada Ley obligaba a los cónyuges a asistir a una sesión previa sobre mediación, tras la cual podrían optar en seguir por este instrumento para la resolución de sus conflictos o acudir a la vía judicial³³.

La obtención de buenos resultados en el Reino Unido a través de las fórmulas de los ADR y especialmente la mediación, llamaron la atención de otros Estados europeos y como consecuencia, llegaron las primeras experiencias mediadoras y las reformas legislativas introductorias de la mediación que tendrán lugar con la Recomendación nº.7/1981 del Comité de Ministros a los Estados miembros del Consejo de Europa, relativa a medidas tendentes a facilitar el Derecho de acceso a la Justicia.

La citada Recomendación invitaba a los Estados miembros a adoptar medidas que facilitasen un mejor acceso a la Justicia, entre las que mencionaba la de animar a las partes a resolver sus conflictos en conciliaciones o en otro tipo de solución amigable, bien antes de acudir al litigio, o en cualquier momento durante su desarrollo.

Le seguiría, en esta misma línea, la Recomendación nº. 12/1986, del Comité de Ministros a los Estados miembros del Consejo de Europa relativa a medidas destinadas a prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los Tribunales de Justicia, la cual, proponía a los Estados incentivar el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y mencionaba la conciliación, la mediación y el arbitraje. Además, se establecía una larga lista de eventuales campos de actuación relativa, sobre todo, a conflictos civiles y comerciales.

Estas Recomendaciones fueron el detonante para muchos Estados de Europa³⁴ a la hora de poner en práctica la mediación, sobre todo, en el ámbito familiar.

³² BLANCO CARRASCO, M., *Mediación y Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos*, cit., p. 36.

³³ BELLOSO MARTÍN, N., “La Mediación Familiar: algunas experiencias en el Derecho Comparado Internacional”, en BELLOSO MARTÍN, N. (coord.), *Estudios sobre Mediación: La Ley de Mediación Familiar de Castilla y León Valladolid*, Primera Edición, Ed. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades Junta de Castilla y León, Valladolid, 2006, pp. 85-86.

³⁴ MACHO GÓMEZ, C., “Origen y evolución de la mediación: el nacimiento del “Movimiento ADR” en Estados Unidos y su expansión a Europa en Anuario de Derecho Civil” (libro en línea). Boletín Oficial del Estado, 2014, tomo LXVII, fasc. III, pp. 931-996. Disponible en: [https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-2014-30093100996_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_Origen_y_evoluci%F3n_de_la_mediaci%F3n:_el_naci]

A principios de los años noventa, la Unión Europea muestra un gran interés por los ADR, como instrumentos alternativos a la vía judicial a la hora de la resolver conflictos y, especialmente, se interesa por la mediación, concretamente en los ámbitos familiar y mercantil. Así, después de mucho trabajo, ese interés se traduce en la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles³⁵. La citada Directiva establece importantes objetivos que van a suponer que todos los Estados miembros integren en los respectivos Ordenamientos Jurídicos la mediación civil y mercantil, al menos con repercusión transfronteriza, para que ésta sea entendida de forma similar por todos los Estados miembros, y para que los acuerdos de mediación logrados puedan ser reconocidos y ejecutados en todo el territorio de la Unión Europea.

Respecto a España, debemos señalar que, métodos de resolución de controversias tales como el arbitraje y la mediación, de una honda raíz romanística³⁶, no son ajenos a nuestra tradición jurídica, donde ya encontramos referencias en nuestro Derecho Medieval³⁷.

En relación con el pasado más próximo, en nuestro país, debemos señalar que antes de que se aprobara la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, existían ya distintas leyes autonómicas sobre Mediación Familiar. La comunidad pionera fue Cataluña, a la que siguieron Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla la Mancha, Castilla y León, Baleares, Madrid, Asturias, País Vasco, Andalucía y Aragón.

miento_del_%93movimiento_ADR%94_en_Estados_Unidos_y_su_expansi%F3n_a_Europa]. “A mediados de la década de los noventa, la práctica de la mediación en el ámbito familiar había gozado de grandes avances en Europa. Se deben destacar los casos de Francia, Alemania, Austria y Holanda, además, empezó a surgir la preocupación en torno a la manera de utilizar la mediación dentro del proceso judicial civil, como muestran los progresos realizados en Holanda y Francia.”.

³⁵ UNIÓN EUROPEA. Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Diario Oficial de la Unión Europea, 24 de mayo de 2008, núm. 136.

³⁶ Vid. VALLEJO PÉREZ, G., *Métodos alternativos de resolución de conflictos en derecho Romano. Especial referencia a la mediación*, Ed. Dykinson, Madrid, 2018.

³⁷ PUY MUÑOZ, F., “La expresión –Mediación Jurídica–: Un análisis tópico en Mediación y solución de conflictos” en OTERO PARGA, M. y SOLETO MUÑOZ, H. (coords.), *Habilidades para una necesidad emergente*, Ed. Tecnos, Madrid, 2007, pp. 21-32. Ya en el Fuero Juzgo se hace referencia al arbitraje que también es mencionado en otros fueros tales como el de Sepúlveda, Nájera y León. Además, encontramos su más amplia regulación en las Partidas, donde se distinguen dos tipos de arbitraje. Esta institución del arbitraje pervive a lo largo del tiempo en nuestro Ordenamiento Jurídico en distintos cuerpos legales. Se ha de destacar, ya en la edad moderna, su mención en la Novísima Recopilación, y llega al siglo XIX recogida en el Código de Comercio de 1829, en la Ley Procesal Civil de 1855 y en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Por lo que respecta a la mediación, ya aparece mencionada y definida en el Fuero de Avilés (1076). Para una línea de investigación son instituciones de mediación tanto el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia como el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, ambos perviven en nuestros días y se encargan de dirimir los conflictos que se produzcan en las comunidades de regantes tradicionales de las huertas de Valencia y Murcia respectivamente.

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles y su puesta en práctica, fijaron los elementos principales de la Mediación, tales como las partes y el propio mediador, y sus principios; la voluntariedad y la libre disposición, el carácter personalísimo de la mediación, la buena fe, el respeto mutuo entre las partes y la posibilidad de actuación por medios electrónicos.

Así, han quedado establecidas las fases del proceso de mediación (solicitud de inicio, sesión informativa, comienzo y desarrollo, sesión constitutiva, acuerdo y ejecución de acuerdo) y también se han fijado los modelos de actuación.

Además de la regulación legal completada con el RD 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos Civiles y Mercantiles (reglamento), la práctica de la mediación se ha extendido por toda la geografía española, debido a la existencia de Servicios Públicos de Mediación Familiar, incluso en las Comunidades Autónomas que no cuentan con leyes de Mediación Familiar.

También debemos referirnos a la Mediación Intrajudicial. Dentro de este ámbito la mediación es un complemento del proceso, de tal manera que la Administración de Justicia, como Servicio Público, ofrece a las partes la posibilidad de solucionar el conflicto a través de la institución de la Mediación. El Consejo General del Poder Judicial creó una Guía para la Práctica de la Mediación³⁸, estableciendo Convenios entre Juzgados e Instituciones para crear Servicios de Mediación, para concienciar a la sociedad y creando relaciones de colaboración entre Instituciones y los profesionales de la Mediación.

Hay que señalar que los últimos “Datos resultantes de la mediación intrajudicial” publicados en la página web del CGPJ son del año 2015, existiendo datos entre los años 2012 y 2015. Analizando dichos datos se comprueba que, por primera vez, en 2015 se observa una bajada del 4,5% de las derivaciones, correspondientes a 5829. De ellas se han realizado 1383 procedimientos de mediación, de los que 539 terminaron con acuerdo.

Un dato muy relevante es que el 54,7% de los casos derivados no acudió a la primera sesión informativa, debido a fallos en la gestión de las derivaciones o en la falta de interés en las partes³⁹.

³⁸ ALASTRUEY, R., FERNÁNDEZ ALAYA, R., LÓPEZ ORTEGA, F. J. y VALL RIUS, A., “Protocolo de Mediación Civil en Guía para la práctica de la mediación intrajudicial. Consejo General del Poder Judicial”, (en línea), p. 11. Disponible en: [<file:///C:/Users/pc/Downloads/20161108%20GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20PR%C3%81CTICA%20DE%20LA%20MEDIACI%C3%93N%20INTRAJUDICIAL.pdf>].

Tal como destaca la presentación de la Guía para la práctica de la Mediación Intrajudicial, ésta constituye una respuesta a dos exigencias: por un lado, la saturación de los juzgados que afecta a su eficiencia, por otro lado, el derecho de los ciudadanos a un efectivo acceso a la Justicia —a través de un método de resolución de conflictos informal, fácilmente accesible, participativo, rápido y a bajo coste—. Sin embargo, la mediación intrajudicial no es alternativa al proceso, sino que es un procedimiento no exento del control judicial.

³⁹ CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (página web), p. 1. Disponible en: [<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Datos-mediacion-intrajudicial/Mediacion-intrajudicial-en-Espana--datos-2015>].

4. LAS BONDADES (VENTAJAS) DE LA MEDIACIÓN COMO SISTEMA PARA RESOLVER LAS DIFERENCIAS

Ya hemos apuntado que la evolución de la sociedad ante una situación de pandemia universal, como la que hemos padecido (y estamos padeciendo) reflejará importantes cambios⁴⁰. Algunos pensadores se decantan por teorías que llevarán a las personas hacia posiciones más individualistas, más egocéntricas, otros que se producirá un reforzamiento de la solidaridad mundial, también algunos piensan en sociedades alternativas, más allá del estado-nación, actualizadas con solidaridad global y cooperación, otras teorías defienden el empoderamiento de los ciudadanos y la solidaridad mundial, también se cree en la creación de sociedades de “riesgo” e incluso hay negacionistas.

Se ha señalado en apartados anteriores algunos importantes hechos que provocaron cambios sociales han sido determinantes para que los métodos alternativos a la vía judicial fueran puestos en práctica. En este momento que nos ha tocado vivir y ante la crisis provocada por el Covid-19, pensamos que la institución de la Mediación, (que como ya hemos visto cuenta con una regulación específica en nuestro país, tanto a nivel autonómico, como nacional) puede ser el más adecuado “medio de solución de diferencias” a tener en cuenta en el citado Anteproyecto de Ley de medidas procesales, tecnológicas y de implantación de medios de solución de diferencias. Instituciones como GEMME (Grupo Europeo de Magistrados para la Mediación) y CUEMYC (Conferencia Universitaria para el Estudio de la Mediación y el Conflic-

⁴⁰ Esta evolución y mutación que ya están experimentando las sociedades es descrita por BELLOSO MARTÍN así: “Del individualismo, desconfianza, aislamiento, rigidez, obligatoriedad, incomunicación (o comunicación artificial), caracterizada por la incertidumbre y caldo de cultivo del conflicto, cabe esperar que ya se haya iniciado una sociedad de la otredad/sociabilidad, confianza en los otros, solidaridad, disposición, tolerancia, comprensión, búsqueda de comunicación (real y sino, virtual), a una búsqueda de la paz y alejamiento del conflicto. Esta sociedad post-Covid tendrá a su vez su reflejo en los valores y principios por lo que se rige la mediación, con mucha mayor fuerza y posibilidades de consecución que en el estadio pre-Covid: empatía, reconocimiento del otro (tanto de las partes mediadas como del mediador en cuanto agente facilitador de acuerdos), cooperación, voluntariedad, flexibilidad, no juzga, fomenta la escucha activa y el diálogo, promueve una cultura de la paz y cuida de proyectarse en el futuro”. BELLOSO MARTÍN, N., “La sociedad del post-Covid19: oportunidad para impulsar y consolidar la mediación”, cit. Entre la bibliografía a la que hace referencia la autora, numerosos textos se han publicado en blogs y en prensa, ya que las reflexiones iusfilosóficas y sociales sobre la pandemia se sucedieron con rapidez. Entre otros, cita la autora los siguientes: HARARI, Yuval Noah, “Yuval Harari: El mundo después del coronavirus”, Diario *La Vanguardia* (05.04.2020) (trad. de artículo publicado en *Financial Times*, trad. de Juan Gabriel López Guix. <https://www.lavanguardia.com/internacional/20200405/48285133216/yuval-harari-mundo-despues-coronavirus.html>). ZIZEK, S., “El coronavirus es un golpe al capitalismo a lo ‘Kill Bill’ que podría reinventar el comunismo”, *Russia Today*, (29 feb 2020). <https://actualidad.rt.com/actualidad/344511-slavoj-zizek-coronavirus-golpe-capitalismo-kill-bill-reinventar-comunismo>. BECK, Ulrich, *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad*, Barcelona, Paidós, 2006. AGAMBEN, Giorgio, “The Invention of an Epidemic”, *European Journal of Psychoanalysis* (Publicado en Italia en *Quodlibet*, <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia>) (26 Febrero 20220) <https://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers/>.

to), entre otras, han remitido al Ministerio de Justicia sendas alegaciones y respuestas en el período de consultas (del 8 al 26 de junio de 2020) sobre el Anteproyecto de Ley de medidas procesales, tecnológicas y de implantación de medios de solución de diferencias.

Como ya hemos apuntado, una vez asentada, la institución de la mediación no ha dejado de expandirse⁴¹, tanto geográficamente como en los distintos ámbitos de aplicación de las relaciones humanas, y ello es debido a que su utilización presenta indudables ventajas⁴².

1. Aplicada de manera general y sistemática, contribuye a descongestionar los tribunales de justicia de asuntos que muchas veces no precisan una judicialización. Aunque, con frecuencia se suele reprochar a estos métodos ADR, particularmente a la mediación, que apuntan a una paulatina privatización de la justicia. Pero, si bien es cierto que estos métodos suponen un coste para las partes “en realidad, el problema no es realizar vagas elecciones ideológicas entre lo “público” y lo “privado”, sino proveer de instrumentos eficientes de tutela a los sujetos que tengan necesidad de ellos, prefiriendo eventualmente lo “privado” pero sólo sobre la base de valoraciones concretas y realistas sobre la oportunidad de uno u otro método de ADR”⁴³.

⁴¹ VIANA ORTA, M.I., “La mediación: Orígenes, Ámbitos de Aplicación y Concepto” en VIANA ORTA, M.I. (ed.), *La mediación en el ámbito educativo en España. Estudio comparado entre Comunidades Autónomas*, Universidad de Valencia, Valencia, 2011, pp. 23-49. Disponible en: <http://www.tdx.cat/handle/10803/81400>. “Creo, con Suares, que, en cada momento de la historia de la humanidad, ésta ha creado y utilizado formas de solucionar los conflictos acordes con sus valores y creencias y que la mediación nace –o renace– en el momento en que, mundialmente, se tiene una concepción más igualitaria del ser humano, a pesar del enorme camino que todavía queda por recorrer. En todos los ámbitos de interrelación (familiar, escolar...) las relaciones están pasando de ser eminentemente verticales a ser relaciones que se mueven en un plano más horizontal. Es por ello, que se hacen necesarias formas de gestión de conflictos más acordes con esa igualdad y con esa horizontalidad. Así, frente a formas meramente adversariales de resolución de conflictos, como el juicio, en las que una parte gana y otra pierde (desigualdad) y es el juez el que resuelve en un plano de jerarquía (verticalidad), en la mediación, las partes son protagonistas de sus conflictos (el ‘empowerment’ trabaja por la igualdad y el equilibrio de poder) y no existe un ganador y un perdedor, sino que ambas partes ganan y se responsabilizan de sus acuerdos (trabajando así en un plano de horizontalidad). Por eso creo, que la mediación seguirá presente siempre que la igualdad, como conquista de la humanidad lo esté también y que, a su vez, servirá para seguir trabajando en favor de esta conquista”.

⁴² Frente a estas ventajas, existen sectores profesionales que, aun señalando las ventajas que presenta la mediación, no dejan de señalar posibles inconvenientes, tales como el aumento de los costes (si no es gratuita) y la dilatación del proceso. Así, VIOLA NEVADO, G., “El rol del abogado y la mediación en Asociación Bienestar y Desarrollo” (página web). Disponible en: [<http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/InfanciayFamilia/Publicaciones/JORNADAS%20CAF%209%20y%2010%20junio/Abogado%20y%20mediaci%C3%B3n.pdf>].

⁴³ TARUFFO, M., “Aspectos de la crisis de la justicia civil: fragmentación y privatización” (*) *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, n.º 3, 1999, pp. 61-75. (*) Conferencia pronunciada el 26 de noviembre de 1998 en el seminario de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Traducción de Silvina Álvarez. Disponible en: <http://afduam.es/wp-content/uploads/pdf/3/PostScript%20anuario03%20p61.pdf>.

2. Respecto a los Tribunales de Justicia es un instrumento más barato y rápido⁴⁴.
3. Por ser un método confidencial lo hace idóneo para aquellos asuntos sobre los que las partes quieran mantener una especial reserva.
4. Constituye una técnica en la que las partes construyen el proceso a la medida de sus necesidades e intereses para resolver el conflicto.

Además, los procesos en los que se pretende llegar a un acuerdo producido por el consentimiento entre las partes implicadas consiguen que los acuerdos alcanzados se perpetúen en el tiempo con un resultado satisfactorio a la resolución del problema o la gestión positiva del conflicto⁴⁵. Consiguiendo disminuir o delimitar las cuestiones planteadas. Acercando las posturas de las partes y rebajando las posturas de las mismas⁴⁶.

De este modo, podemos apreciar como los resultados de aplicar a una mera mediación redundan en acuerdos duraderos, que pueden además reducir la belicosidad entre las partes, aunque la generalización no evite que algunos casos se enquisten y no fructifiquen jurídicamente de forma adecuada, pero los años de experiencia mediadora exponen un horizonte de expectativas muy positivas para la práctica de la mediación.

En definitiva, las bondades de la mediación no deben reducirse a mera enunciación de sus ventajas, ya sabidas y repetidas hasta la saciedad. La lentitud de la Administración de Justicia se está convirtiendo en un verdadero obstáculo para hacer efectivo el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, porque no basta con poder presentar una acción litigiosa sino de tener una respuesta y en un plazo razonable.

⁴⁴ MURCIANO ÁLVAREZ, G., “Mediación no es mediación”, (blog). Disponible en: [<https://blog.sepin.es/2014/01/mediacion-no-es-mediacion/>]. Señala el autor que “(...) la vía judicial para la gran mayoría de la sociedad, supone que debe hacerse acompañado de asesoría técnica para poder estar bien defendido y que no se sufra una merma en nuestros derechos, esto implica que debía acudirse con abogado, en muchas ocasiones con procurador y en otras muchas con peritos. Y todo esto no es gratis, una defensa bien construida por un buen profesional justifica un precio, y eso multiplicado por tres. Además, el ir acompañado de un buen letrado no siempre garantiza ganar, pues puede darse el caso de que el cliente insista y pretenda defender lo indefendible y acabe con una condena en costas. Y en cualquier caso hay que tener presente que siempre hay un perdedor.”

⁴⁵ GARCÍA PRESAS, I., *La Mediación Familiar desde el ámbito Jurídico*, Ed. Jurua, Portugal, 2010, pp. 30-31. Y así, como ejemplo, podemos citar la experiencia de PRESAS, la cual recogemos textualmente: “Fruto de mi observación del trabajo de los diversos mediadores y mediadoras con los que me he relacionado es que he llegado a valorar altamente su labor. He aprendido muchísimo de su actividad y cada día valoro más la importancia de su trabajo, que es esencial tanto para las personas que se acercan a su actividad como para la sociedad en general. Desde luego, pude comprobar como situaciones de gran complejidad jurídica y humana han tenido una rápida y eficaz solución cuando han intervenido un equipo de mediación, dándose la circunstancia de que los asuntos que se han resuelto con su intervención dan lugar a acuerdos que prácticamente en todos los casos se cumplen sin reticencias por parte de los litigantes. Además, tras el acuerdo mejoran las relaciones interpersonales y desaparece la beligerancia, lo que propicia soluciones transaccionales en otros posibles problemas que puedan surgir en un futuro entre ellos”

⁴⁶ GONZÁLEZ MARTÍN, L. A., “El proyecto de mediación civil en los juzgados de Madrid” en LAUROBA LACASA, M^a. E. y ORTUÑO MUÑOZ, P. (coords.), *Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de Mediación Civil y Mercantil*, Ed. Huygens, Barcelona, 2014, pp. 43-44.

La pandemia ofrece la oportunidad para que a la mediación se la configure como el método por excelencia de gestión de conflictos cooperativo, negociado, capaz de gestionar con diligencia y economía los conflictos reales de los ciudadanos en una sociedad a la que el virus ha trastocado desde el ámbito de la salud, la economía y la sociedad. La potenciación de la capacidad negociadora de las partes se muestra ineludible. Instituciones como CJPJ (Consejo General del Poder Judicial, GEMME (Grupo de Europeo de Magistrados para la Mediación), MP (Ministerio Público), CUEMYC (Conferencia de Universidades para el Estudio de la Mediación y el Conflicto), CGAE (Consejo General de la Abogacía Española) y tantas otras, todas conocedoras de primera mano de los litigios y acciones judiciales, de los procedimientos de actuación de la Administración de Justicia, coinciden en la necesidad de reforzar la mediación, que hará posible esos acuerdos consensuales para favorecer un dinamismo contractual, económico, paliar los conflictos familiares, y gestionar, en definitiva, de manera cooperativa las diferencias. Se debe de transmitir a la sociedad una visión de confianza en la potencialidad de la mediación.

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV., *Diccionario Latino-Español*, Ed. Luis Vives, Zaragoza, 1965.
- ABOGACÍA ESPAÑOLA. CONSEJO GENERAL, “Propuestas para el denominado PLAN DE ACTUACIÓN a que se refiere la Disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19”. Disponible en: [https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2020/04/PROPUESTAS-CGAE-DISPOSICIÓN-ADICIONAL-19-RD_LEY-11_2020-21-de-abril-de-2020.pdf].
- ALBANÉS MENBREILLO, A., “El arbitraje visto por un abogado”, Artículo digital. Disponible en: [<http://www.bufete-albanes.com/publicaciones/conferencias/EL%20ARBITRAJE%20VISTO%20.pdf>].
- BARONA VILAR, S., *Solución extrajurisdiccional de conflictos. ADR y Derecho Procesal*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.
- BARONA VILAR, S., “Fomento de las ADRS en España (Hacia un sistema de tutela plural del ciudadano que permita la desconflictivización y la búsqueda de la paz social)”, *Revista Sequência*, n.º 51, 2005.
- BELLOSO MARTÍN, N., “La Mediación Familiar: algunas experiencias en el Derecho Comparado Internacional” en BELLOSO MARTÍN, N. (coord.), *Estudios sobre Mediación: La Ley de Mediación Familiar de Castilla y León*. Valladolid, Ed. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades Junta de Castilla y León, Valladolid, 2006.
- BELLOSO MARTÍN, N., “¿Hacia un Estado pandémico? Algunas valoraciones a partir del efecto Covid-19” en PILAU SOBRINHO, L-L. CALGARO, C. y SEVERO ROCHA, L. (dirs.), *COVID-19 e seus paradoxos*, vol. I, Universidade de Caxias do Sul-Universidade de Passo Fundo-Universidade do Vale do Itajaí-Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil, 2020.

- BELLOSO MARTÍN, N., “La sociedad del post-Covid19: oportunidad para impulsar y consolidar la mediación”, en PILIA, C. y CERDEIRA, G., (dirs.), EUGENIO PIZARRO MORENO, E. (coord.), *Mediación, conciliación y arbitraje tras la pandemia*, vol. II, Olenijk, 2020, (en prensa).
- BELLOSO MARTÍN, N., “La multidimensionalidad de una pandemia. Sociedad y Derecho en la era del post-coronavirus”, *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho*, n.º 43, (diciembre 2020) (inédito).
- BELLOSO MARTÍN, N., “La sociedad del post-covid19: oportunidad para impulsar y consolidar la mediación”, 2020 (inédito), texto presentado en el *IV Simposio Mediación y Tribunales, Pulso al impulso de la mediación en el nuevo escenario postpandemia*, organizado por el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación en España (GEMME España) celebrado entre los días 21 al 25 de septiembre de 2020 (en prensa. Se publicará en las Actas del Simposio).
- BERMEJO REALES, L. F., “La eficacia de las decisiones arbitrales: la impugnación y ejecución de laudos”, *Revista jurídica de Castilla y León Mediación y Arbitraje*, n.º 29, 2013.
- BERNAL SAMPER, T., *La Mediación. Una solución a los conflictos de ruptura de pareja*, Ed. Colex, Madrid, 2008.
- BLANCO CARRASCO, M., *Mediación y Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos*, Ed. Reus, Zaragoza, 2009.
- BONORINO RAMÍREZ, P. R., “Justicia y justo comunitario” en IGLESIAS CANLE, I. C. (dir.), *Mediación, Justicia y Unión Europea*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014.
- BRAVO BOSCH, M. J., “Sobre el nuevo Real Decreto-Ley 5/2012 y la mediación familiar”, *Revista General de Derecho Romano*, n.º 18, 2012.
- BUTTS GRIGGS, T., *La mediación en el proceso. Apuntes sobre mediación y gestión de la ira*, ICAM, Madrid, 2005.
- CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE, (página web). Disponible en [<https://es.linkedin.com/in/corte-esp%C3%B1ola-de-arbitraje-7429a133>].
- CUADRADO GAMARRA, N., “Diferencias entre los sistemas Romano-Germánico (Civil Law) de Common Law y su repercusión en la inteligencia artificial”, *KÍNESÍS: Revista Electrónica de Metodología e Historia del Derecho - Revista del Instituto de Metodología y Ciencia Jurídica*, n.º 2, 2005.
- España. Ley 1/2007, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, Boletín Oficial del Estado, 8 de enero de 2000, núm. 7.
- España. Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, Boletín Oficial del Estado, 3 de julio de 2015, núm. 158.
- España. Ley 60/2003 de 23 de diciembre, de Arbitraje, Boletín Oficial del Estado, 266 de diciembre de 2003, núm. 309.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., “El arbitraje de Derecho público en la experiencia jurídica romana”, *Diario del Derecho*, (en línea), Madrid. Disponible en: [http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp].

- FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., “Del arbitraje romano configurado a semejanza de los juicios - *compromisso quod iudicium imitatur*”, *Revista de Derecho, UNED*, n.º 11, 2012.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., *La Deuda histórica del arbitraje moderno, Concordancias entre la Ley 60/2003, de Arbitraje y el Derecho arbitral griego y romano*, Ed. Dykinson, Madrid, 2017.
- FIDE, “Resolución de conflictos en Tiempos del Covid-19: La Mediación”, página web. Disponible en: [https://www.fidefundacion.es/Resolucion-de-Conflictos-en-Tiempos-del-Covid-19-la-Mediacion_a1318.html].
- GARCÍA VILLALUENGA, L., *Mediación en conflictos familiares. Una construcción desde el Derecho de familia*, Ed. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2006.
- GRUPO EUROPEO DE MAGISTRADOS POR LA MEDIACIÓN (GEMME), “GEMME recomienda fomentar la mediación ante el aumento de litigiosidad que deja el coronavirus”, página web. Disponible en: [<https://mediacionesjusticia.com/mediacion-vs-litigiosidad>].
- GONZÁLEZ DE COSIO, F., “El Árbitro”, (en línea). Disponible en: [<http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/EL%20ARBITRO.pdf>].
- GONZÁLEZ DE COSIO, F., “Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad de los árbitros”, (en línea), p. 2. Disponible en: [<http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/INDEPENDENCIA%20IMPARCIALIDAD%20Y%20APARIENCIA%20DE%20LOS%20ARBITROS.pdf>].
- GONZÁLEZ MARTÍN, L. A., “El proyecto de mediación civil en los juzgados de Madrid” en AA. VV., LAUROBA LACASA, Mª. E. y ORTUÑO MUÑOZ, P., (coords.), *Mediación es Justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de Mediación Civil y Mercantil*, Ed. Huygens, Barcelona, 2014.
- GUASP DELGADO, J., *Derecho Procesal Civil (II)*, UNED, Madrid, 1968.
- GUASP DELGADO, J., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Ed. Aguilar, Madrid, 1947.
- IZAGUIRRE ARTAZA, J., “El Arbitraje y la Mediación en Estados Unidos, Ed. ICEX España Exportación e Inversiones, 2014. Disponible en: [<file:///C:/Users/Gemma/Downloads/4768017.pdf>].
- JUNTA ARBITRAL DE BARCELONA, (página web). Disponible en [[http://tab.es/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=45&lang=es.Definición de arbitraje](http://tab.es/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=45&lang=es.Definición%20de%20arbitraje)].
- MACHO GÓMEZ, C., “Origen y evolución de la mediación: el nacimiento del “Movimiento ADR” en Estados Unidos y su expansión a Europa” en *Anuario de Derecho Civil* (libro en línea). *Boletín Oficial del Estado*, 2014, tomo LXVII, fasc. III, pp. 931-996. Disponible en: [https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-2014-30093100996_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_Origen_y_evoluci%F3n_de_la_mediaci%F3n:_el_nacimiento_del_%93movimiento_ADR%94_en_Estados_Unidos_y_su_expansi%F3n_a_Europa].

- MACHO GÓMEZ, C., “Origen y evolución de la mediación: el nacimiento del «movimiento ADR» en Estados Unidos y su expansión a Europa”, *Aid to Dependent Children*, n.º 67, 3, 2014.
- MCMANUS, M., SILVERSTEIN, B., “Brief History of Alternative Dispute Resolution in the United States”, *Cadmus. Promoting Leadership in Thought that Leads to Action*, n.º 1, 3, 2011.
- MERCHÁN ÁLVAREZ, A., “La jurisdicción arbitral en la Constitución de Cádiz”, CANO BUESO, J., (Editor), *Materiales para el estudio de la Constitución de 1812*, Ed. Parlamento de Andalucía/Tecnos, Sevilla, 1989.
- MORENO CATENA, V., “La resolución jurídica de conflictos” en AA.VV., SOLETO MUÑOZ, H., (dir.), *Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos*, Ed. Tecnos, Madrid. 2001.
- MINISTERIO DE JUSTICIA, “Consulta pública sobre el anteproyecto de ley de medidas procesales, tecnológicas y de implantación de medios de solución de diferencias”, página web. Disponible en: [https://ficheros.mjusticia.gob.es/Consulta_publica_APL_MEDIDAS_PROCESALES_solucion_diferencias.pdf].
- MURCIANO ÁLVAREZ, G., “Mediación no es –mediación–”, (blog). Disponible en: [<https://blog.sepin.es/2014/01/mediacion-no-es-mediacion/ns>, 2014].
- ORTUÑO MUÑOZ, P., “Introducción: El impulso a la mediación en la experiencia de los PNPM” en AA.VV. LAUROBA LACASA, Mª. E. y ORTUÑO MUÑOZ, P., (coords.), *Mediación es justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de Mediación Civil y Mercantil*, Huygens, Barcelona, 2014.
- PÉREZ VAQUERO, C., “La importancia de la Conferencia Pound en Análisis y curiosidades jurídicas/iustopia”, (blog), agosto 2014. Disponible en: [archivodeinalbis.blogspot.com.es/2014/08/la-importancia-de-la-conferencia-pound.html].
- PUY MUÑOZ, F., “La expresión –Mediación Jurídica–: Un análisis tópico en Mediación y solución de conflictos” en OTERO PARGA, M. y SOLETO MUÑOZ, H., (coords.), *Habilidades para una necesidad emergente*, Ed. Tecnos, Madrid, 2007.
- RODRIGUES, C., “La Mediación. ¿Una respuesta al nuevo paradigma del Derecho?”, *Rev. Derecho*, n.º 15, 2017.
- SAN CRISTÓBAL REALES, S., “Sistemas alternativos de resolución de conflictos: negociación, conciliación, mediación, arbitraje, en el ámbito civil y mercantil”, *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, XLVI, 2013.
- TARUFFO, M., “Aspectos de la crisis de la justicia civil: fragmentación y privatización”, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, n.º 3, 1999. Conferencia pronunciada el 26 de noviembre de 1998 en el seminario de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Traducción de Silvina Álvarez. Disponible en: [<http://afduam.es/wp-content/uploads/pdf/3/PostScript%20anuario03%20p61.pdf>].
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA: Sentencia 288/1993, de 4 de octubre. Boletín Oficial del Estado, n.º 268.

- UNIÓN EUROPEA, Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Diario Oficial de la Unión Europea, 24 de mayo de 2008, núm. 136.
- UNIÓN EUROPEA, “Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del Derecho Civil y Mercantil”, Unión Europea, Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas, Unión Europea. Comisión de las Comunidades Europeas, 2002, pp. 1-40. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-jurisprudencia/Normativa-europea/Libro-Verde-sobre-las-modalidades-alternativas-de-solucion-de-conflictos-en-el-ambito-del-derecho-civil-y-mercantil>.
- UNITED STATES OF AMERICA. “Uniform Mediation Act (Last Revised or Amended in 2003), The National Conference of Commissioners on Uniform State Law”, 2003. Disponible en: [http://www.uniformlaws.org/shared/docs/mediation/uma_final_03.pdf].
- VALLEJO PÉREZ, G., “Arbitraje y fiscalidad en el Derecho Romano”, *Revista General de Derecho Romano*, IUSTEL, n.º 24, 2015.
- VALLEJO PÉREZ, G., *Métodos alternativos de resolución de conflictos en derecho Romano. Especial referencia a la mediación*, Ed. Dykinson, Madrid, 2018.
- VÁZQUEZ LÓPEZ, A., “La mediación en USA”. Flash Press (blog), Abril de 2013. Disponible en: [<http://alenmediagroup.blogspot.com.es/2013/04/la-mediacion-en-usa.html>].
- VIANA ORTA, M. I., “La mediación: Orígenes, Ámbitos de Aplicación y Concepto”, en VIANA ORTA, M. I., (editora), *La mediación en el ámbito educativo en España. Estudio comparado entre Comunidades Autónomas*, Universidad de Valencia, Valencia, 2011. Disponible en: [<http://www.tdx.cat/handle/10803/81400>].
- VIOLA NEVADO, G., “El rol del abogado y la mediación en Asociación Bienestar y Desarrollo” (página web). Disponible en: [<http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/InfanciayFamilia/Publicaciones/JORNADAS%20CAF%209%20y%2010%20junio/Abogado%20y%20mediaci%C3%B3n.pdf>].